

Violencia electoral y crimen organizado en el Edomex

BERNARDO BARRANCO V.

Las elecciones son un factor determinante en la democracia. Han permitido una transferencia pacífica del poder. Las alternancias han fortalecido las transiciones bajo una atmósfera de civilidad y benevolencia social. Sin embargo, las elecciones a menudo significan un aumento de la violencia. ¿Qué condiciones favorecen la violencia electoral? En el Edomex, el PRI quiere aferrarse al poder como lo ha hecho durante 93 años. No importa cómo, ni con quién, ni cuánto. ¿Esta violencia siempre ha logrado el resultado deseado? El objetivo principal de la violencia electoral es influir en el resultado de los comicios. Esta violencia se expresa más en un contexto de transición democrática frágil. Es una herramienta de manipulación de la intención del voto.

Violencia y el fraude electoral van de la mano. En violencia institucional, la compra y coacción de votos en una entidad cada vez más empobrecida. Los actores políticos se aprovechan de la lacerante pobreza en la entidad. El Coneval ha reportado que en 2005, 26 por ciento de los mexicanos no podía cubrir la canasta básica con su trabajo. Este cuadro subió a 46 por ciento a fines de 2020.

El estado de México es la tercera entidad más violenta del país. Homicidios dolosos, extorsión, *narcomenudeo*, robo a casas, a usuarios de transporte público y de vehículos. Sobre todo, el estado México es primer lugar en feminicidios.

El contexto no es halagador. Se respira todo tipo de violencia. En el Edomex, los actores clásicos de la violencia electoral son la estructura de gobierno, la policía local, los partidos políticos con el PRI a la cabeza, pandillas criminales y grupos del crimen organizado. La violencia se manifiesta típicamente como hostigamiento, amenazas, intimidación, atentados y asesinato de candidatos o coerción por criminales. Hasta los órganos electorales pueden ejercer una violencia electoral jurídica, es decir, acciones legalmente fundadas, pero moralmente inaceptables.

Violencia significa usar la fuerza bruta para obligar a un individuo o grupo a doblegar a su voluntad. Esta fuerza bruta puede ser simbólica, verbal o física. El agresor puede ser uno o varios individuos; puede también ser un gobierno. Esta impostura puede caracterizarse por usar la fuerza del aparato represivo del Estado.

Al final del proceso electoral de 2021, el editorial de *La Jornada* enuncia el alto nivel de la violencia electoral: "Las campañas electorales que terminaron ayer han sido de las más violentas en el estado de México. *Levantones*, amenazas que impidieron el proselitismo en el sur del estado; candidatos baleados en Jilotepec y Tlalnepantla, además de confrontaciones físicas entre brigadas en Metepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Huixquilucan y Nezahualcóyotl tornaron la contienda en una de las más ríspidas en la entidad" (3/6/21). A escala federal se denunciaron, antes de la jornada electoral, 170 atentados de violencia política entre septiembre y abril, y 210 asesinatos de actores políticos y miem-

bros de equipos de campaña vinculados al proceso. Preocupa que 32 candidatos sean asesinados por grupos políticos adversarios, el crimen organizado y muchos de estos casos sigan impunes.

La violencia del crimen organizado preocupa de manera especial. Las bandas del sur mexicano imponen en sus territorios a sus candidatos, vetan aspirantes no afines, imponen reglas metaconstitucionales que desafían la democracia y al propio Estado mexicano. La zona sur del Edomex está dominada territorialmente por organizaciones criminales. Como todos sabemos, tierra caliente es un espacio de disputa entre *La familia michoacana*, *Los caballeros templarios*, *Guerreros Unidos* y el cártel Jalisco *Nueva Generación (CJNG)*.

El nuncio apostólico Franco Coppla, en sorpresiva visita a Aguililla, Michoacán, misma zona de tierra caliente, declaró ante la feligresía: "Lamento el nivel de barbarie que vive la zona... Pero hay que reconocer que el crimen organizado florece cuando se presenta la ausencia del Estado" (*El País*, 23/3/21).

En cambio, la Secretaría de Seguridad del estado de México tiene identificados por inseguridad y violencia 33 municipios considerados de riesgo de cara a las elecciones. De estos 33 municipios, 17 son de riesgo alto. En su mayoría son localidades conurbadas y con alta densidad poblacional, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca o Tecámac. El secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, dice que, de esos 17 municipios, 11 los gobierna Morena (Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Texcoco, Tultitlán y Zumpango); el PRI gobierna cuatro (Coacalco, Cuautitlán, Los Reyes La Paz y Toluca); mientras el PAN gobierna uno (Cuautitlán Izcalli), y el PVEM Malinalco.

“

¿Qué fue a hacer el secretario de Gobierno con los obispos?

Alejandra del Moral va muy abajo en las encuestas. Pareciera que la situación obliga a un replanteamiento radical de su estrategia. Y si hay alguien que sabe de trapacerías electorales es ella. Siendo presidenta del PRI, las aplicó con Alfredo del Mazo en 2017 y en los comicios de 2021. Podrían venirse escenarios bareados en que no podremos dar a la candidata de la coalición "constancia de buena conducta".

En tanto, el secretario de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, pintaba un panorama rosa a los obispos reunidos en abril en su 114 asamblea plenaria de la conferencia. No hay focos rojos en las elecciones. Por cierto, ¿qué fue a hacer el funcionario con los obispos?